

Sobre la intervención económica del Estado

Ramón Martínez Escamilla*

En el breve espacio de *Momento Económico* es sumamente difícil hacer un comentario detenido y a profundidad sobre el contenido del Primer Informe de Gobierno del presidente Salinas de Gortari. Esto es especialmente cierto en el caso de la intervención del Estado en la economía, no sólo porque es la parte medular del Informe sino sobre todo porque es en el entorno de esa intervención que se finca toda la política económica del régimen que preside y buena parte, la sustancial podría decirse, de su filosofía política.

Pero hablar de su política económica y de su filosofía política no es, necesariamente, aludir a líneas generales que definen de manera preclara una nueva visión del acontecer nacional ni mucho menos deslindarla de la corriente de pensamiento y acción pública a que, en lo que va del Siglo XX, ha tenido que enfrentarse la sociedad nacional cada vez que la dañifican sus gobiernos.

Y no es que nos interese demostrar aquí que la más grave carencia de la política del presente régimen consiste en la carencia de originalidad, pues ésta es una verdad que por evidente está en la conciencia de toda la sociedad; sino que, lo que realmente debiera destacarse de tal política es su plena identidad con la que desde los años veinte han estado impulsando internamente "los sectores"¹ que más tienen y apoyando desde el exterior las entidades económicas y financieras a cuya acción de socios mayoritarios se circunscribe y la participación de aquéllos.

Nadie ha dicho ni dirá en este volumen que las apariencias no puedan ser engañosas. De hecho, cuando "el pueblo" sale al encuentro del presidente Salinas cada semana durante la rutina visita a las zonas, regiones o colonias marginadas, y hace marco a las expresiones de su política económica, no va en ayunas a pesar de que no ha trágado la rueda de molino de que les va a dar más porque son los que menos tienen, pues sin ser un pueblo de economistas, sabe que con expresiones abiertas por las dos puntas como aquella que regresan recitando del extranjero los más aventajados doctores en *Economics* de "obtener los máximos resultados con el mínimo de medios", nadie va a movilizar a las masas para algo más que conveniencias inmediatistas, y éstas en el México de hoy son todas político-electorales.

Y es que las carencias y vitales necesidades tienen caras de hereje. Tanto, que a veces enseñan la prudencia y hasta la socarronería de aceptar como verdad provisional aquello que no llegará a serlo en definitiva aunque se repita, como en el esquema de Goebels, millares o millones de veces por todos los medios posibles.

"El Pueblo" sale al encuentro y se deja retratar con el presidente sabedor de que éste, para seguir repitiéndolo en además de autoridad, algo habrá de darle que le siga haciendo llevadera su desgracia social mientras se encuentran nuevos *slogans* oficiales y se avecinan tiempos menos malos. Y lo hace porque a fuerza de intuirlo, sabe que si bien "la defensa de la soberanía es proteger a los mexicanos frente a las pretensiones hegemónicas

de otras naciones", hoy nadie está defendiendo esa soberanía; y que si el presidente se pregunta ante la Nación "¿a quién protegemos dentro de nuestras fronteras?", la respuesta que podría darle de inmediato es la de que *no están protegiendo a los que menos tienen*.

Por eso, el bofetón que asestó en Cananea a la política de desincorporación de empresas paraestatales o el que ha mantenido en Sicartsa aunado al que plantea el magisterio al margen del sindicalismo corporativo, son más elocuentes que todas las fotos y todos los encabezados noticiosos. Al saber que el Estado adquirió "empresas en dificultades financieras para salvar la fuente de trabajo y apoyar las cadenas productivas", sabe también la carta de ilegitimidad que representa el cerrarlas ahora que la desocupación abierta es uno de los signos más aterradores de la crisis económica de México. Al saber que adquirir o crear esas empresas "fue una política que logró éxitos muy considerables en comparación con muchos países del mundo", sabe también que ahora que "las circunstancias cambiaron", "México se transformó" en pedigüño internacional al influjo no tanto del Estado cuanto de sus últimos gobiernos, y que fue para desandar lo andado, porque "lo que antaño fue garantía de crecimiento y de expansión para el bienestar", en manos de éstos se convirtió "en su obstáculo directo".

La crisis no "nos mostró que un Estado más grande no es necesariamente un Estado más capaz", ni que "un Estado más propietario no es hoy un Estado más justo". Estas son sólo expresiones, como decía, abiertas por las dos puntas. Lo que en realidad vino a mostrar, en México como en otros países, es que el personal político que hoy ha tomado las riendas del Estado capitalista, históricamente carece de capacidad para afrontar el reto de un destino mejor para la sociedad nacional y que esto es tanto más cierto cuanto más dependiente y falta de soberanía ha vuelto a la estructura económica la actuación técnica reciente de ese mismo personal. Vino a demostrar también que más Estado no significa necesariamente más tecnocracia, pero que más tecnocracia significa menor capacidad política para afrontar los grandes problemas de nuestro tiempo, que se están enarbolando sólo en aras de mayor alineamiento proimperialista y menor vocación por la independencia y la justicia social.

En otras palabras, el gran negocio de la crisis vino a abanderar con la ideología del retroceso y sus barnices populistas a una juventud política carente de imaginación emancipada y creadora. Por eso, desde que ésta estuvo en condiciones de influir en la formulación de la política económica de México, más Estado significó también "menos capacidad para responder a los reclamos sociales de nuestros compatriotas y, a la postre, más debilidad del propio Estado". Por eso también, "mientras aumentaba la actividad productiva del sector público, decrecía la atención a los problemas de agua potable, de salud, de inversión en el campo y de alimentación, de vivienda, de medio ambiente y de justicia. El Estado se extendía mientras el bienestar del pueblo se venía abajo".

Cuando el presidente Salinas asume ante la Nación "el imperativo político y moral de volver al sentido original de la Revolución", y reconoce que quienes conforman el gobierno que él encabeza deben "recobrar, para una sociedad moderna,

* Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

¹ Excepto éste, todos los entrecuadrados provienen del texto oficial del Primer Informe de Gobierno.

un Estado reformado bajo el espíritu de la soberanía popular de 1917", el contexto en que su texto se ubica al respecto es de hueca palabrería. La interpretación que ofrece de la Revolución Mexicana y de los más caros principios doctrinales de la Constitución de 1917, es la que puede desprenderse de su inspiración y postura clasista —pues en el capitalismo la sociedad moderna es la sociedad de clases— y no la que correspondería a una investidura de consenso popular entendida ésta no como proveniente "del pueblo", así en abstracto, sino de las masas populares organizadas políticamente. El concepto de "pueblo" que maneja está despojado de antemano de las características que ha sido capaz de imprimirle la innegable modernidad de la estructura social mexicana a la que pretende corresponder su discurso.

De ahí la parrafada que resume en unas cuantas palabras: "Un Estado que no atienda al pueblo por estar tan ocupado administrando empresas, no es justo ni es revolucionario". De ahí también la sentencia con que de un plumazo pretende recomponer la historia nacional del último medio siglo y enrocar la del presente sexenio: "La privatización no deposita en manos ajenas al Estado la conducción del desarrollo".

Es cierto que "el Estado dispone ahora de recursos, de atención y de oportunidad para utilizar los formidables instrumentos de la política de gasto, ingreso, aranceles, precios públicos, subsidios y la fortaleza de las empresas estratégicas para determinar el rumbo del desarrollo y hacer realidad el proyecto que la nación demanda". Pero también lo es que tal proyecto dista mucho de ser el que ha insistido en esbozar y convertir en discurso político el señor presidente; pues por debajo de ese discurso, los recursos y mecanismos que señala están siendo escamoteados en su valor y en sus efectos a las masas populares, y asignados de manera directa a los capitalistas, beneficiarios directos del alineamiento económico hacia el Imperio, mientras "el pueblo" sigue apareciendo en las fotos del Primer Magistrado.

Hace ya tiempo que terminó la etapa de extinción o de liquidación de empresas paraestatales que por poco productivas

o porque su inactividad las había convertido en verdaderos montones de chatarra eran sólo una pesada carga para la economía del sector público. También fue cumplida la etapa en que geopolítica y presupuestalmente convino realizar la transferencia hacia las instancias de gobierno no federales de aquellas empresas que socialmente convenía conservar no obstante sus problemas contables y financieros. También fueron puestas a la venta algunas que manteniendo un aceptable grado de rentabilidad económica y de beneficio social, fueron y son consideradas como no prioritarias ni estratégicas. Y a la hora de cerrar este comentario están en marcha varios procesos de venta al mejor postor de algunas empresas que, como el caso de Teléfonos de México, para una economía como la de este país son altamente prioritarias además de típicamente estratégicas.

Y se tendría que reconocer que no ha faltado lucidez y hasta ingenio socarrón en las exposiciones no de razones sino de motivos para el caso de cada empresa. Lo mismo para un dique seco o para una pesquería destartada del Pacífico que para algún ingenio de los que ahora están al servicio de las refrescaderas transnacionales mientras "el pueblo" no tiene azúcar o la paga a precio de oro y los cañeros y pescadores se caen carcomidos por la miseria.

Ante carencias tan graves como son las que padecen las clases asalariadas de la sociedad mexicana en materia de alimentación, educación, salud, vivienda y ante la ya muy candente insuficiencia de fuentes de trabajo e ingreso de muy amplias capas de la población urbana y rural, cabría esperar que el gobierno de la República vislumbrara aquellas actividades económicas que por prioritarias, por estratégicas estructuralmente hablando, reclaman la creación de muchas empresas *descentralizadas* del Estado, mientras la iniciativa privada se regodea en la compra de las que los tecnócratas de los dos últimos regímenes presidenciales no han sabido o no han querido administrar en favor de México. Y cuando me refiero al gobierno de la República no me refiero al segmento ejecutivo que ha demostrado hasta la saciedad no tener vocación ni voluntad política para ello, sino al segmento legislativo que objetivamente ya podría comenzar a dar muestra de menor sumisión y servilismo político hacia aquél, y responder de mejor manera a la ciudadanía que le depositó el sufragio.

¿De qué otra manera podría comenzar a resolverse en el mediano plazo de un trienio o en el largo plazo de un sexenio y a costos que no obliguen a recurrir a mayor endeudamiento externo para el que parece ya no haber recursos ni voluntad disponibles, la grave carencia nacional de plantas industriales, de ferrocarriles, de puertos, de plantas energéticas, de modernos complejos de servicios sociales, de comunicaciones, de escuelas, de universidades, de laboratorios, de complejos de investigación científica y tecnológica y demás equipamiento de la moderna sociedad nacional? ¿De qué otra manera podría considerarse como moderna, adecuada a nuestro tiempo y a nuestras necesidades sociales y económicas, una política oficial y un ejercicio del poder que pretende fortificar la "rectoría del Estado"?

Pero esas quizá sean respuestas que convenga dejar para noviembre de 1990 al redactor del Segundo Informe de Gobierno y al comité oficial de recepción de su contenido. Un año no es poca cosa para meditar en tales respuestas.

